



por Juan Andrés Lagos

Justicia, nada más, pero nada menos

El ministro del Presidente Lagos, Vidal, ha señalado que la postura del Partido Comunista es «irreductible» y que su objetivo es «la venganza», al referirse a las declaraciones de la Comisión Política del PC respecto del seminario en la Escuela Militar en el cual participaron personeros de la derecha, la Concertación y jefes castrenses.

No pasó una semana, e importantes hechos permiten evaluar una y otra postura. Tras el impacto del informe de prisión política y tortura, una creciente ola de asombro, indignación y dolor ha tapizado Chile. Muchos buscan más información, otros tratan de indagar en las causas que provocaron tamañas atrocidades. En la medida que pasan los días, muy pocos se atreven a justificar esas violaciones a los derechos humanos, y muy pocos sostienen la posibilidad de un acuerdo o conciliación sobre la base de la no justicia.

Lo que en verdad ocurre es que la operación política de La Moneda está fracasando, y eso al parecer indigna a personeros acostumbrados a ser escuchados, a hablar con ecos de resonancia, pero muy pocas veces a escuchar realmente.

El informe del gobierno sobre tortura y prisión política tiene una base mayor: los antecedentes que durante años recopiló la Vicaría de la Solidaridad, el Codepu, el Fascic, la Comisión Chilena de Derechos Humanos y otros organismos avalados por las Naciones Unidas. La base de esos antecedentes fueron el «piso» del Informe Rettig, pero no toda esa información se hizo pública y se entregó a los tribunales de justicia después de conocido ese informe entregado por el Presidente Aylwin.

Bien se puede sostener que la base «dura» de esa información ya existía. La comisión formada por La Moneda recopiló y ratificó, pero tal vez lo más relevante es que se tomó la determinación gubernamental de guardar por cincuenta años en secreto todo lo recopilado.

Se esperó que el informe provocara su impacto, pero que no llegara a los tribunales de justicia. Curiosamente, muy curiosamente, en el seminario de la Escuela Militar, lugar que en su momento también

fue usado como centro de tortura y prisión, el centro no fue precisamente la búsqueda de los caminos para alcanzar la justicia, no: fue una serie de exposiciones destinadas a imponer un consenso sobre la base de componendas, mea culpas, recriminaciones débiles y veladas, y hasta presiones para impedir el debido proceso, la verdad judicial y las condenas correctas.

Entonces, cuando el PC cuestionó todo eso y demandó justicia, el ministro Vidal habló de una postura «irreductible» de los comunistas y de un afán de venganza. La historia, sin embargo, es otra. Cerca de 35.000 recursos de amparo y protección fueron presentados ante tribunales de justicia bajo la dictadura de Pinochet. No pocos de ellos fueron por militantes comunistas detenidos, desaparecidos, torturados, ejecutados. Casi todos fueron rechazados, pero los comunistas siguieron demandando justicia a los tribunales.

Cuando el terror de Estado mataba sin ningún límite, en poblaciones, barrios, universidades, escuelas, los comunistas decidieron formar el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, FPMR, y lo hicieron para levantar una legítima defensa ante el crimen y la violencia militar, para defender la vida en contra de la muerte. Hay que tener gran hipocresía para no reconocer estos hechos de la historia de Chile. Sin embargo, aun en ese período, los comunistas siguieron reconociendo a los tribunales y continuaron exigiendo justicia.

Al comenzar la llamada transición, todos los esfuerzos del PC se centraron en lograr verdad y justicia. Muchos se molestaron, otros se burlaron, cuando Gladys Marín presentó la primera querrela judicial en contra de Pinochet. Es lógico, una gran mayoría de abogados, militantes comunistas, son los defensores de la mayoría de los casos de violaciones a los derechos humanos en donde se ha logrado justicia. Hay que reconocer que no pocos juristas no comunistas, han jugado un notable papel en esta batalla: DC, PS, PR, independientes, todos profesionales con una fuerte vocación ética y moral.

Las agrupaciones de familiares, medios de prensa, periodistas, organizaciones sociales, han jugado un papel gravitante, como lo demuestran los casos de Tucapel Jiménez, los tres profesionales degollados y la matanza de la «operación Albania», por nombrar algunos.

¿Dónde está venganza? El fondo, en realidad, es otro. Para justificar la injusticia, la denegación de justicia, se pretende nublar o deslegitimar a quienes «irreductiblemente» la demandan, y eso será imposible porque es evidente que este país ha crecido sensiblemente en la adopción de conciencia respecto de las violaciones a los derechos humanos. No háy posibilidad, ni espacio, para la imposición de operaciones políticas, aunque esto les moleste a los voceros del palacio gubernamental.